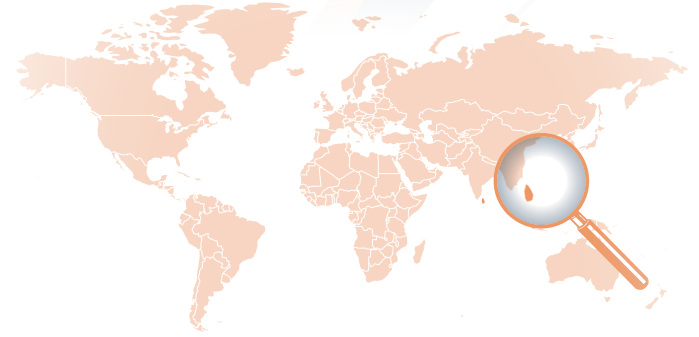




EL RACISMO COMO FACTOR DE RIESGO DE CRÍMENES ATROCES:

Un estudio de caso de Sri Lanka¹

Autora: Bhavani Fonseka



El siguiente estudio de caso ha sido redactado por una consultoría independiente en nombre de la Iniciativa Global de Justicia, Verdad y Reconciliación (Global Initiative for Justice, Truth and Reconciliation, GIJTR). El informe de este caso se presenta junto con una investigación documental, análisis de documentos y entrevistas, y es un reflejo de estas perspectivas y hallazgos, tal como fueron compilados y redactados por el o los autores asesores. Las entrevistas se anonimizaron para garantizar la seguridad y la privacidad. La GIJTR quiere expresar su gratitud a todas las personas entrevistadas por su tiempo y participación.

1 Introducción

En 2023, Sri Lanka celebró 75 años de independencia, tras más de cuatro décadas de dominio colonial. Lamentablemente, una historia de tensiones raciales y étnicas arraigadas en el pasado del país contribuyó a una guerra étnica que duró décadas y concluyó hace menos de veinte años. Hoy, el etnonacionalismo y el racismo persisten en Sri Lanka. Las causas subyacentes del conflicto perduran y no se ha hecho ningún esfuerzo, o muy poco, para abordar los factores estructurales que contribuyen a la discriminación y la violencia. Los fracasos en varios ámbitos—para abordar las causas profundas del conflicto, frenar el etnonacionalismo y la violencia, y responsabilizar a los agresores e iniciar medidas que impidan la recurrencia—han contribuido a una cultura de impunidad. Esta perspectiva existe porque Sri Lanka ha sido escenario durante décadas de violaciones por parte de agentes estatales y no estatales, con una escasa intervención para que los responsables rindan cuentas.

Este estudio de caso examina brevemente los aspectos clave del racismo y los crímenes atroces en Sri Lanka. Comenzamos con un breve repaso de las dinámicas históricas pertinentes. Luego, analizamos la situación actual del racismo en Sri Lanka y la marginación de determinadas comunidades. El estudio contempla los factores que contribuyen a los crímenes atroces, seguido por un análisis de las estrategias y herramientas empleadas por las partes interesadas para hacer frente al racismo y la violencia en

Sri Lanka. A continuación se hace un balance de los éxitos y fracasos de estas iniciativas y se concluye con una breve sección de recomendaciones.

2 La compleja historia de Sri Lanka: siglos de tensiones étnicas y raciales

El último censo nacional de Sri Lanka, realizado en 2012, indicaba que los cingaleses representaban el 74,9% de la población, los tamiles de Sri Lanka el 11,2% y los musulmanes, el 9,3%. El resto lo componen los tamiles de Malaiyaha, los burghers, los malayos y las personas clasificadas como “otros.”² La población se clasifica además por religión: budistas, hindúes, musulmanes, católicos romanos, cristianos y otros. La mayoría de los cingaleses son budistas y la mayoría de los tamiles son hindúes, aunque ambos grupos cuentan con un número significativo de cristianos y católicos. El censo más reciente refleja una población diversa en Sri Lanka, que ha convivido durante cientos de años, pero que, debido a las políticas racistas y a los prejuicios estructurales, ha luchado por encontrar una paz duradera e igualdad para todos. Los problemas actuales comenzaron hace mucho tiempo y una breve historia constituye un lugar apropiado para comenzar este estudio de caso.

Sri Lanka sufrió el dominio colonial de tres grupos: los portugueses (1505-1658), los holandeses (1658-1796) y, por último, los británicos (1796-1948). El etnonacionalismo y las tensiones en Sri Lanka surgieron de forma significativa durante el periodo colonial, enfrentando a la comunidad mayoritaria cingalesa con la minoritaria tamil. Esta historia influyó en las políticas y la legislación adoptadas tras la independencia, contribuyendo a perpetuar la discriminación y la violencia. Esta sección analiza brevemente los acontecimientos que han contribuido a las divisiones étnicas y religiosas en Sri Lanka, incluyendo la discriminación institucional y las pruebas de crímenes atroces en todo el país.

Tras la independencia: la omnipresencia del racismo en Sri Lanka

Durante el dominio británico, se percibía que la comunidad tamil se beneficiaba más de los nombramientos oficiales, lo cual generaba tensiones entre los cingaleses y los tamiles. Cuando Sri Lanka obtuvo la independencia de los británicos en 1948, se produjo una serie de acontecimientos en el país que beneficiaron a los cingaleses. Una ley clave que benefició a la comunidad mayoritaria, y que ha influido en la trayectoria de Sri Lanka, es la Ley de Solo Cingalés de 1956. Esta ley convirtió al cingalés en la única lengua oficial de Sri Lanka, lo cual creó grandes obstáculos para que los hablantes de tamil accedieran a servicios públicos, así como a empleos y ascensos gubernamentales.³ Otra política clave que evidenció la discriminación hacia las poblaciones minoritarias fue la estandarización. La

ESTE ES UN PROYECTO DE LA INICIATIVA GLOBAL DE JUSTICIA, VERDAD Y RECONCILIACIÓN (GIJTR).

Lanzado en el 2014 por la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, GIJTR es un consorcio de nueve organizaciones internacionales que se centran en ofrecer enfoques holísticos, integradores y multidisciplinarios en temas de verdad, justicia y reconciliación. GIJTR trabaja principalmente con poblaciones locales, organizaciones de la sociedad civil, sobrevivientes y gobiernos con el fin de desarrollar enfoques de justicia transicional que se centren en las víctimas, sean colaborativos y que apoyen la dignidad, el respeto, la inclusión y la transparencia de sociedades que emergen de conflictos o períodos de gobierno autoritario. Desde su fundación, GIJTR se ha comprometido con personas de 76 países, ha trabajado con 681 OSC y ha llevado a cabo 463 proyectos impulsados por la comunidad y más de 7,460 iniciativas contra las violaciones de derechos humanos.

gijtr.org



GIJTR

Global Initiative for Justice
Truth & Reconciliation

política buscaba ofrecer oportunidades educativas a los estudiantes cingaleses desfavorecidos, mientras exigía a los estudiantes tamiles que obtuvieran mejores resultados en los exámenes para ser admitidos a la universidad. Estos cambios y la política lingüística se justificaron como respuesta a la histórica falta de oportunidades para los cingaleses, ya que la comunidad se consideraba marginada durante el periodo de colonización británica. Las dos políticas tuvieron como consecuencia que los estudiantes tamiles, los funcionarios y la comunidad tamil en su conjunto se vieran desfavorecidos en el acceso a los servicios, los empleos y las admisiones universitarias.

Desde la independencia de Sri Lanka persisten numerosos problemas de discriminación racial. Las prácticas y políticas discriminatorias agravaron las tensiones étnicas entre la comunidad cingalesa y tamil, y en 1958 y 1977 se produjeron disturbios. El pogromo de 1983, durante el cual se produjeron días de violencia patrocinada por el Estado contra la comunidad tamil, dejó miles de muertos y desplazados al quedar destruidos los hogares y bienes de los tamiles.⁴ Estos ciclos de violencia llevaron a parte de la comunidad tamil a buscar asilo en otros países, creando una gran diáspora dispersa por todo el mundo.

Labores políticas para reducir la discriminación: fallos del sistema

Las continuas prácticas y políticas discriminatorias se produjeron durante varios intentos fallidos de lograr un acuerdo político. Se promulgaron leyes draconianas, como la Ley de Prevención del Terrorismo (PTA, por su sigla en inglés), que se utilizaron para atacar a las minorías y a los críticos.⁵ Durante la época de la guerra se declararon varios estados de emergencia; se utilizaron normas de excepción para restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como para detener y encarcelar a quienes se consideraba una amenaza para la seguridad nacional. El uso de la PTA, que se introdujo como ley temporal en 1979 para perseguir a las minorías y a los críticos, también ha sido causa de abusos durante décadas. Estas y otras leyes se han utilizado para perseguir a individuos y comunidades, convirtiendo la lucha antiterrorista y de emergencia en la norma más que en la excepción durante los años de guerra y algunos periodos de posguerra en Sri Lanka.⁶

La lucha por un acuerdo político continuó durante décadas. En 1987, los gobiernos de Sri Lanka e India firmaron el Acuerdo de Paz Indo-Sri Lanka que culminó con la adopción de la decimotercera enmienda a la Constitución y la Ley de Consejos Provinciales de 1987. De este modo, se preveía la devolución del poder a las provincias.⁷ Este es el marco actual en Sri Lanka, pero la devolución de poder ha sido limitada y se presentan desafíos en su aplicación.

A su vez, la continua discriminación a la que se enfrentan las minorías llevó a la formación de partidos políticos para la representación de sus intereses.⁸ El sistema electoral de Sri Lanka es un sistema representativo proporcional que ofrece a los grupos más pequeños la posibilidad de desempeñar un papel crucial en la política. De este modo, varios partidos minoritarios se han convertido en socios de coalición en el gobierno y han ejercido su influencia para negociar a favor de sus comunidades. A pesar de ello, el etnonacionalismo persiste. La falta de progreso en la búsqueda de una solución política dio lugar a la aparición de varios grupos tamiles, algunos de los cuales reclamaban una patria tamil separada o Tamil Ealam.⁹ A raíz de estos llamamientos, se emplearon tácticas armadas y se incrementó la violencia entre los grupos tamiles. Uno de estos grupos, los Tigres de Liberación de Ealam Tamil (LTTE, por su sigla en inglés), recurrió a la violencia y atacó a sus oponentes tamiles mediante asesinatos políticos y otros actos violentos hasta que finalmente se proclamó como único representante del pueblo tamil.

Julio Negro: el violento camino hacia la guerra

Los ciclos de violencia culminaron con la guerra civil de casi tres décadas en 1983 entre el gobierno de Sri Lanka (GOSL) y los LTTE.¹⁰ Fue provocada por el asesinato de varios soldados cingaleses en Jaffna (norte de Sri Lanka). Sus funerales se realizaron en el corazón de Colombo y la violencia se propagó a varias partes de la ciudad. La comunidad tamil fue el blanco y sus propiedades fueron saqueadas, quemadas y destruidas. En el transcurso de

varios días de violencia, las turbas cingalesas se valieron de los registros electorales para atacar a las comunidades tamiles, con algunas acusaciones de que la actividad era violencia patrocinada por el Estado. Este periodo se conoció como “Julio Negro.” En 2023 se cumplen 40 años de ello. Para muchos, Julio Negro simbolizó el papel del Estado en la persecución violenta de las minorías. Como señaló un testigo presencial, “los acontecimientos en torno a Julio Negro fueron un claro indicador de la política estatal de racismo y de cómo se trataba a las minorías como ciudadanos de segunda clase.”¹¹ Julio Negro inició la guerra civil junto con casi treinta años de violencia que asoló a Sri Lanka. Finalmente, la violencia cesó, pero solo tras la derrota militar de los LTTE, lo que incluyó el asesinato de su cúpula en mayo de 2009. La violencia dejó decenas de miles de muertos, desaparecidos y desplazados, así como una devastación masiva a nivel general.¹²

3 Situación actual de las relaciones raciales: una frágil paz después de la guerra

A pesar del fin de las hostilidades, los años de posguerra han sido marcados por ciclos de violencia etnonacionalista y etnorreligiosa, incluyendo nuevas incitaciones y discursos de odio. La pandemia de COVID-19 y la crisis económica de 2021-22 trajeron consigo nuevos retos, entre ellos restricciones a las libertades civiles y nuevas inquietudes. Los recientes acontecimientos han destacado las complejas relaciones y tensiones etnorreligiosas de Sri Lanka y han contribuido al aumento de la preocupación por su frágil paz. Los retos se extienden a casi todos los grupos minoritarios de Sri Lanka.

Violencia etnorreligiosa: riesgos para la comunidad musulmana

La comunidad musulmana ha sufrido discriminación y violencia tanto por parte de iniciativas apoyadas por el Estado como por agentes privados.¹³ La expulsión de los musulmanes del norte por los LTTE y los ataques a las mezquitas en 1990, donde perecieron varios fieles musulmanes, son casos en los que la comunidad se enfrentó a la violencia a manos de un agente no estatal, con profundas repercusiones para la coexistencia y la reconciliación. La comunidad musulmana ha sufrido discriminación, acoso, incitación y violencia por parte de grupos nacionalistas extremistas.¹⁴

La violencia etnorreligiosa de los años de posguerra ha registrado un aumento en la incitación y la violencia de los grupos budistas cingaleses extremistas, incluyendo el clero budista, contra las comunidades tamil y musulmana, incluidos sus lugares de culto y sus propiedades. Incidentes como la violencia en Aluthgama en 2014, Digana en 2018 y los Atentados del Domingo de Pascua en 2019, estuvieron vinculados a grupos cingaleses de línea dura con la participación de clérigos budistas extremistas que incitaron a la violencia contra la comunidad musulmana.¹⁵ Por ejemplo, grupos como el Bodu Bala Sena (BBS), han sido acusados de incitación sin que se haya tomado medida alguna al respecto.

Los años de posguerra también han visto el auge de la desinformación y el discurso de odio a través de las redes sociales. En algunos casos, las redes sociales han dado lugar a ataques y actos de violencia contra la comunidad musulmana, como se vio en los atentados ya mencionados de Aluthgama, Digana y el Domingo de Pascua. Si bien el uso de las redes para difundir noticias falsas y discursos de odio provocó el cierre temporal de algunas plataformas, no se ha tomado medida alguna contra los partidos que difundían noticias falsas o incitaban a la violencia. En lugar de exigir responsabilidades individuales, el líder del BBS fue designado para dirigir un grupo de trabajo por el entonces presidente Gotabaya Rajapaksa, lo cual demuestra la protección y el patrocinio por parte de los políticos y el gobierno.

Acumulación de poder estatal: demostrar la impunidad mediante estructuras sancionadas por el Estado

En los últimos años también se ha observado la aparición de otros grupos nacionalistas extremistas en todas las comunidades.¹⁶ Han surgido muchas personas que afirman proteger a la raza budista cingalesa con reclamos de apoyo estatal para obtener tierras y fondos. El apoyo oficial para estos grupos era evidente durante las presidencias de Mahinda Rajapaksa (2005-15) y Gotabaya Rajapaksa (2019-22), ya que se ofrecieron puestos clave en el gobierno y en las instituciones a personas vinculadas a estos grupos. Ese tipo de actitudes también se hizo patente en los grupos comerciales, mediáticos y profesionales estrechamente vinculados a la familia Rajapaksa y al ejército. Se observaron matices etnonacionalistas en algunas de las posturas y en los mensajes de algunos medios de comunicación y entidades comerciales, sobre todo en las campañas antimusulmanas de la posguerra.¹⁷

El nombramiento de varios grupos de trabajo por el entonces presidente Gotabaya Rajapaksa despertó inquietud por sus implicaciones en materia de gobernanza y derechos. Una entidad en particular para tratar cuestiones de importancia arqueológica en la provincia oriental de Sri Lanka estaba dirigida por el Secretario del Ministerio de Defensa y por un clérigo budista y propietario de un medio de comunicación. El nombramiento de este grupo de trabajo se produjo mientras aumentaba la tendencia del gobierno a emplear el patrimonio nacional y la arqueología a fin de apropiarse de tierras pertenecientes a comunidades minoritarias y utilizadas por ellas. La provincia oriental está compuesta por las tres comunidades (musulmanes, cingaleses y tamiles) y la ausencia de representación de las minorías en el grupo de trabajo inicial suscitó preocupación.¹⁸ También se cuestionó por qué se otorgaba a un grupo de trabajo el poder de estudiar la arqueología cuando ya existían instituciones estatales con el mismo mandato. Para agravar la situación, la participación de los militares en la identificación y protección de los sitios fomentó la percepción de un nexo entre los grupos extremistas budistas cingaleses y los militares. Todas estas actividades se producían mientras aumentaban las medidas para la apropiación de tierras pertenecientes a minorías bajo el pretexto de la seguridad nacional, el desarrollo y el patrimonio nacional, lo cual planteaba dudas sobre si se trataba de la continuación de viejas tendencias para modificar la demografía de la zona y así influir en las perspectivas electorales. Como señala un académico: “El creciente uso de la arqueología para justificar la apropiación de las tierras refuerza el temor de que se trate de la táctica más reciente para alterar la demografía de la zona.”¹⁹

Otro grupo de trabajo nombrado por el presidente Gotabaya Rajapaksa estaba encabezado por el líder del BBS con el mandato de formular una política de “un país, una ley.” Las minorías, la sociedad civil y otros sectores temían que se tratara de otra forma de minar la diversidad cultural y el pluralismo de Sri Lanka.

El racismo inherente a la política estatal resultó evidente durante la pandemia de COVID-19, cuando el gobierno prohibió entierros y cremaciones.²⁰ Esta política afectó especialmente a la comunidad musulmana, que se vio obligada a seguir una política contraria a sus prácticas religiosas de sepultura. A pesar de que no había pruebas de que entrañara riesgos para la salud, y de que los expertos sanitarios insistieron en que se reconsiderara la medida, el gobierno se negó a revocar la política. La revocación solo se produjo varios meses después, y apenas

unas semanas antes del comienzo de la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDHNU), donde el historial de derechos humanos de Sri Lanka estaba bajo la lupa, lo cual indica que la marcha atrás solo obedecía a la presión internacional.

Riesgo de racismo para otras comunidades minoritarias

Asimismo, se debe considerar a la comunidad tamil de Malaiyaha, que fue llevada originalmente a Sri Lanka por los británicos como mano de obra forzada para trabajar en las plantaciones de té o como comerciantes. (En 2023 se cumplen 200 años de su llegada al país). Han sufrido discriminaciones a lo largo de los años, como la denegación de su ciudadanía y grandes dificultades para acceder a servicios básicos como vivienda, salud, educación, direcciones, entre otros.²¹ La comunidad no obtuvo la nacionalidad de Sri Lanka hasta 2003 con la Ley de Ciudadanía. Dos décadas más tarde, la comunidad continúa teniendo dificultades para obtener documentación oficial debido a retrasos administrativos y la falta de servicios en la zona, lo cual la coloca en una situación vulnerable y la expone a una mayor violencia estructural. Algunos miembros aún no disponen de documentos básicos como certificados de nacimiento y documentos nacionales de identidad, lo cual dificulta la obtención de servicios gubernamentales o la solicitud de empleo.²² Muchos miembros de la comunidad continúan trabajando en las plantaciones de té y cobran salarios muy bajos, a pesar de que la industria del té es una economía clave en Sri Lanka. Pese a los 75 años transcurridos desde la independencia, las condiciones de vida de la comunidad no han mejorado. Siguen viviendo en lo que se denomina “habitaciones de línea,” una habitación individual construida como parte de una unidad residencial cuyo origen se remonta a la época colonial. Como señaló un activista que trabaja con la comunidad: “los servicios de atención sanitaria y de educación son inadecuados, con niños desnutridos y con peso inferior al normal.”²³ A su vez, persisten problemas sociales como la violencia doméstica, el alcoholismo, entre otros. A pesar de los intentos de hacer presión para mejorar los salarios, las condiciones de vida y los servicios, las respuestas del Estado y de la industria del té han sido lentas y se resisten al cambio. Algunos se han trasladado a otras zonas de Sri Lanka como consecuencia de las desigualdades estructurales y en busca de oportunidades educativas y laborales.

Las prácticas discriminatorias contra otros grupos continúan, incluso contra las poblaciones indígenas de Sri Lanka conocidas como los wanniyatto o la comunidad veddha. Residen en zonas de las provincias de Uva y del este del país y se han enfrentado a dificultades para acceder a servicios básicos como la educación, la salud y la vivienda, así como a limitaciones para ejercer sus derechos culturales. Durante décadas se les consideró anticuados y poco sofisticados, aunque la migración urbana de los últimos años ha producido cambios, ya que la generación más joven ha abandonado la comunidad en busca de trabajo y mejores condiciones de vida.²⁴

Además, los derechos lingüísticos han sido un problema persistente en Sri Lanka debido al legado de la Ley de Solo Cingalés. La decimotercera enmienda a la Constitución reconoció al tamil como lengua oficial, pero las comunidades de habla tamil todavía se enfrentan a problemas prácticos, ya que los documentos gubernamentales, los comunicados e incluso los carteles oficiales siguen estando en cingalés.

“Cingalización:” etnonacionalismo a través de la apropiación de tierras

La propiedad de la tierra ha sido un tema muy disputado en Sri Lanka. Ha habido numerosos conflictos relacionados con el etnonacionalismo y la apropiación de tierras bajo el pretexto de la seguridad nacional, el turismo, el desarrollo, el patrimonio nacional y la arqueología.²⁵ Durante décadas, los planes de colonización patrocinados por el Estado han supuesto el traslado de la comunidad mayoritaria a zonas que estaban ocupadas predominantemente por personas de habla tamil. Además, se tomaron territorios para instaurar zonas de alta seguridad y acantonamientos militares, desplazando a la población de sus hogares y tierras de cultivo. La continua

ocupación militar de grandes extensiones de terrenos privados, incluso más de 14 años después del final de la guerra, plantea interrogantes sobre por qué el gobierno no logra encontrar soluciones duraderas.

Asimismo, todo esto se ha producido en un contexto de temores crecientes de que la apropiación de tierras para la seguridad nacional obedece al objetivo de cambiar la demografía y afianzar el nexo budista cingalés y militar. Lo que se ha denominado “cingalización” ha ocasionado la aparición de placas y nombres de pueblos en cingalés, así como de lugares de culto budista, todos ellos cada vez más comunes en las zonas predominantemente tameses.²⁶ El auge de los templos budistas construidos en la región ha dado lugar a nuevos asentamientos cingaleses.²⁷ El creciente número de miembros de la comunidad cingalesa en las dos provincias fomenta el temor de que la “cingalización” patrocinada por el Estado modifique la demografía y, en consecuencia, repercuta en los resultados electorales. Esta situación también ha contribuido a la aparición de nuevos conflictos étnicos en la zona y al miedo por la apropiación de tierras y la militarización, además de cambios demográficos. Los intentos más recientes de las autoridades y del clero budista son servirse del patrimonio nacional y de la arqueología para apropiarse de tierras que pertenecen a minorías y de lugares de culto religioso. A su vez, esto ha propiciado el resurgimiento del clero budista de línea dura y de los grupos budistas cingaleses.

Legislación e impacto en el racismo estructural

Durante años, Sri Lanka ha sufrido el uso de leyes antiterroristas y de emergencia para atacar a las minorías mediante arrestos y detenciones.²⁸ La Ley de Prevención del Terrorismo (PTA, por su sigla en inglés) es un ejemplo del uso de una ley draconiana para detener a personas durante años, o incluso décadas, basándose en pruebas infundadas. Esto incluye presos políticos detenidos durante años en virtud de la PTA que luego son liberados sin cargos. Asimismo, se ha empleado para forzar confesiones: las investigaciones locales independientes y los pronunciamientos judiciales confirman que a menudo se tortura a las minorías para obtener tales confesiones. Además de la PTA, las autoridades han recurrido al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por su sigla en inglés). El artículo 3(1) del ICCPR tipifica como “delito la propagación de la guerra o la apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.” Esta disposición ha servido en los últimos años para arrestar y detener a cómicos, blogueros y autores por criticar al budismo. En contraste, no se han tomado medidas para que rindan cuentas quienes han incitado a la violencia contra las comunidades minoritarias.

Como señala un educador y activista radicado en la provincia oriental de Sri Lanka, “la intolerancia y la marginación se manifiestan en los distintos niveles de gobierno y se han filtrado a la sociedad y a los medios de comunicación.”²⁹ La incapacidad y la falta de voluntad para abordar la discriminación y la violencia constantes incitadas por los nacionalistas extremistas budistas cingaleses perpetúa la percepción de que algunos están más allá de la ley y refuerza la sensación de impunidad. El nombramiento de clérigos de línea dura y otros en instituciones clave transmite el mensaje de que algunos están protegidos por el gobierno actual. Estas prácticas han legitimado las ideologías y prácticas racistas entre las instituciones estatales, los medios de comunicación y la sociedad. Como hemos mencionado, en los últimos años también se han utilizado los medios sociales para difundir noticias falsas, información errónea y desinformación, lo que ha exacerbado las tensiones etnorreligiosas y, en ocasiones, la violencia. Los sucesos de la posguerra en Sri Lanka demuestran cómo los medios sociales en una sociedad propensa a la instigación y la violencia pueden desatar más violencia que, a su vez, puede derivar en crímenes atroces.

4 Cómo el racismo contribuye al riesgo de atrocidades

Sri Lanka se enfrenta a varios retos que contribuyen al riesgo de atrocidades. Esta sección profundiza en algunas cuestiones planteadas anteriormente y en cómo las prácticas y políticas discriminatorias pueden contribuir al riesgo de crímenes atroces.

A pesar de que la Constitución garantiza la igualdad para todos los ciudadanos y de que el artículo 12 (2) prohíbe la discriminación por motivos de “raza, religión, lengua, casta, sexo, opinión política, lugar de nacimiento o cualquiera de estos motivos,” existen dificultades prácticas a las que se enfrentan los individuos y las comunidades. Si bien hay leyes contra la discriminación, no existe una legislación que proporcione y promueva la igualdad de oportunidades similar a las leyes que se encuentran en otras mancomunidades. Esto deja a los grupos minoritarios sin recursos jurídicos. Además, persisten las prácticas discriminatorias en el sector privado al igual que en otras entidades ajenas a la función pública.

Desde hace muchos años, los grupos de derechos humanos locales e internacionales y las Naciones Unidas han documentado leyes, políticas y prácticas discriminatorias en Sri Lanka, incluyendo cómo las minorías étnicas y religiosas han sido objeto de ataques y marginación por parte de actores estatales y no estatales.³⁰ En su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDHNU) en 2021, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos habló de señales de alerta temprana de un deterioro de la situación de los derechos humanos y de un aumento del riesgo de futuras violaciones, por lo que instó a los Estados miembro a establecer un sólido programa de prevención.³¹ La Alta Comisionada destacó la creciente militarización de las funciones del gobierno civil, la revocación de garantías constitucionales, los problemas de rendición de cuentas, la retórica excluyente, la intimidación de la sociedad civil y el uso de leyes antiterroristas. El informe se debatió en el CDHNU y se adoptó una resolución en 2021 que solicitaba el seguimiento de la labor de Sri Lanka en materia de derechos humanos y reconciliación, entre otras medidas.

El hecho de que Sri Lanka lleve más de una década ante el CDHNU (la primera resolución se adoptó en 2012) indica que persisten los desafíos en materia de rendición de cuentas, derechos humanos y reconciliación. Los informes del Alto Comisionado, los informes de grupos locales e internacionales, la documentación de los procedimientos especiales de la ONU e incluso las conclusiones de los mecanismos nacionales señalan múltiples desafíos en estos ámbitos tan amplios. Algunas de estas cuestiones indican cómo los conflictos etnorreligiosos pueden causar más violencia.

El etnonacionalismo ha fundamentado durante décadas las políticas y prácticas discriminatorias contra las comunidades minoritarias.³² Las leyes como la PTA y el ICCPR continúan en vigor, a pesar de las pruebas de que la PTA se ha utilizado en gran medida contra las minorías tamil y musulmana, y el ICCPR se ha convertido en un arma contra quienes critican el budismo.³³ Mientras tanto, quienes incitan a la violencia contra las minorías quedan impunes. En 2021, el gobierno del momento intentó aplicar la normativa emitida en virtud de la PTA para abordar lo que se denominó “desradicalización,” enviando a los individuos a “rehabilitación” sin las debidas garantías procesales. Esto se consideró el intento más reciente del gobierno de utilizar las leyes antiterroristas para atacar a las minorías y sostener la narrativa de los grupos islámicos radicalizados. Se impugnó ante el Tribunal Supremo, lo que resultó en una orden de suspensión que sigue vigente en la actualidad. En los últimos años han surgido otras propuestas problemáticas, como el proyecto de Ley Antiterrorista, que contenía disposiciones alarmantes y garantías procesales limitadas. Las críticas de la opinión pública y las impugnaciones judiciales han retrasado la introducción de tales leyes y reglamentos, pero el hecho de que los sucesivos gobiernos intenten promulgar leyes tan draconianas en la Sri Lanka de posguerra habla de una mentalidad que no considera prioritaria la protección de las libertades civiles.

En esta sección se han destacado algunos ejemplos de leyes, políticas y prácticas represivas basadas en el etnonacionalismo y que atacan a las minorías étnicas y religiosas. Las políticas, leyes y prácticas discriminatorias han perpetuado la incitación y la violencia con el temor de que se desencadenen nuevos conflictos. Como hemos mencionado, algunas plataformas de medios sociales proporcionaron noticias falsas, información errónea

y desinformación que desataron actos de violencia etnorreligiosa, entre ellos los incidentes de Aluthgama (2014), Digana (2018) y los atentados posteriores al Domingo de Pascua (2019) contra la población musulmana. Esto provocó el cierre temporal de algunas plataformas de medios sociales, pero no se tomaron medidas para responsabilizar a los autores individuales. Como señaló un antiguo comisario de una iniciativa estatal “la incapacidad de Sri Lanka para abordar las causas subyacentes del conflicto y proceder contra los responsables de la violencia alimenta el racismo con el consiguiente riesgo de que estallen nuevos conflictos.”³⁴

5 Resistencia comunitaria: una respuesta al racismo

Sri Lanka cuenta con una activa resistencia liderada por los ciudadanos que durante décadas ha utilizado diversos métodos para desafiar las leyes, políticas y prácticas discriminatorias.³⁵ Se han empleado protestas, vigiliadas, ocupaciones pacíficas, debates públicos y peticiones públicas, entre otras tácticas de movilización ciudadana, para oponerse a las iniciativas estatales. Esto ha incluido a diversos agentes, desde grupos de víctimas y la sociedad civil hasta sindicatos, partidos políticos y grupos profesionales. Más recientemente, una crisis económica sin precedentes provocó una protesta de miles de personas durante varios meses que finalmente llevó a la dimisión del presidente y de su gobierno.

La movilización ciudadana de 2022 (analizado más adelante) se basó en la rica historia de activismo político de Sri Lanka. Esto incluye la formación del Frente de Madres en Sri Lanka, que sensibilizó sobre las desapariciones forzadas e impulsó la rendición de cuentas.³⁶ Las protestas de posguerra de las familias de los desaparecidos continuaron durante más de 2000 días. Otros temas que han sido objeto de diferentes formas de movilización son las comunidades agrícolas y pesqueras cuyos medios de subsistencia se vieron afectados por las desastrosas políticas estatales, las comunidades que se oponen a la apropiación de tierras y los profesores y sindicatos que se opusieron a la militarización de la enseñanza superior, así como quienes recuerdan a sus seres queridos fallecidos en todo Sri Lanka. La destitución del entonces presidente del Tribunal Supremo y las atrocidades cometidas durante la guerra fueron motivos que unieron a diversos grupos para oponerse a la presidencia de Mahinda Rajapaksa.³⁷

La involución democrática y el etnonacionalismo evidentes durante la presidencia de Gotabaya Rajapaksa y su mala gestión de la economía provocaron un nivel de movilización sin precedentes. Se unieron personas de todas las profesiones y condiciones sociales: diferentes grupos profesionales y etnias, religiones y grupos etarios. El primer movimiento para unificar a los grupos tamiles y musulmanes bajo el régimen de Gotabaya Rajapaksa fue la marcha de Pottuvil a Polikandy, realizada en febrero de 2021. Miles de personas se manifestaron para exigir igualdad y justicia para las comunidades minoritarias. Los manifestantes se enfrentaron a la vigilancia y la intimidación y desafiaron las órdenes judiciales para continuar la marcha y plantear sus reclamos. A medida que las protestas avanzaron, también lo hicieron los intentos del gobierno por sofocar la disidencia mediante la violencia, la intimidación y otras tácticas, incluyendo restricciones arbitrarias.³⁸

El poder del LIP: litigios de interés público para concientizar

Las protestas en Sri Lanka se han transformado en los últimos años, trascendiendo las tradicionales protestas callejeras para incluir los litigios de interés público (LIP), el uso de los medios sociales y las artes. Las redes sociales en Sri Lanka han aportado nuevos niveles de energía y creatividad a las protestas y han aumentado la participación de personas de todas las edades y regiones. Esto se hizo evidente en 2022, cuando muchos recurrieron a las

plataformas de los medios sociales para sensibilizar a la opinión pública y resistirse a las tácticas represivas.

El uso del LIP aumentó en los últimos años, con más ciudadanos presentando demandas para impugnar las enmiendas propuestas al marco constitucional y legislativo de Sri Lanka, así como las prácticas injustas y arbitrarias. El LIP también ha contribuido a debates más amplios entre los responsables políticos y el público, concientizando sobre importantes temas contemporáneos. Los medios sociales han ayudado a informar al público de los acontecimientos en la sala del tribunal y de sus implicancias. El LIP se ha utilizado también para impugnar proyectos de ley y reglamentos que otorgan amplios poderes al ejecutivo para arrestar y detener, prácticas arbitrarias que intentan apropiarse de tierras y silenciar a los medios de comunicación y a los críticos, entre otros. En los últimos años, diferentes agentes unidos mediante el litigio y otras medidas han combatido esta arbitrariedad. Por ejemplo, la crisis constitucional de 2018 unió a partidos políticos, la sociedad civil, sindicatos y académicos para desafiar la flagrante toma de poder por parte de Mahinda Rajapaksa que supuso la destitución arbitraria del primer ministro en ejercicio y el caos en la gobernanza. En un raro momento de unidad, muchos salieron a la calle para impugnarlo ante el Tribunal Supremo y el Tribunal de Apelación de Sri Lanka. Cincuenta y dos días de activismo culminaron en una sentencia histórica que puso fin a la crisis con la dimisión de Mahinda Rajapaksa y la restitución de Ranil Wickremasinghe como primer ministro.

Del mismo modo, la introducción del proyecto de enmienda n° 20 de la Constitución en 2020, que consolidó aún más el poder en la presidencia ejecutiva y debilitó las instituciones independientes, llevó a la unión de diversos actores. Los activistas actuaron contra el proyecto de ley presentando recursos judiciales ante el Tribunal Supremo y recurrieron a protestas, campañas en los medios de comunicación y debates políticos para expresar su disconformidad, forzando al gobierno a introducir varias enmiendas al proyecto de ley. A pesar de su mayoría en el Parlamento, el Gobierno se vio obligado a incorporar varias de estas enmiendas, un triunfo para una confederación de grupos infrarrepresentados.

Aragalaya: el poder de las protestas

En 2022, una crisis sin precedentes volvió a despertar la movilización ciudadana. Las manifestaciones denunciaban la escasez de artículos de primera necesidad (y las largas colas para conseguirlos), el altísimo coste de la vida y los largos cortes de electricidad. Las protestas continuaron durante varios meses e incluyeron la formación de lugares de ocupación como el de Galle Face Green (conocido como “GotaGoGama”), que se mantuvo durante más de 100 días.³⁹ Sorprendentemente, a pesar de que el gobierno impuso medidas de emergencia y acudió a la intimidación para disuadir a los manifestantes, las protestas pacíficas continuaron y finalmente resultaron en la dimisión del presidente y de su Gobierno.

Un año después de Aragalaya, la movilización ciudadana continúa, pero a menor escala. El espacio que se creó durante la Aragalaya permitió concientizar sobre otros temas, como el etnonacionalismo, la reconciliación y otras cuestiones. Por ejemplo, el primer acto público de conmemoración en el sur por el final de la guerra se celebró en GotaGoGama en mayo de 2022 y le siguió otro en otra zona de Colombo en mayo de 2023.

La Aragalaya también fue notable porque vinculó comunidades de diferentes regiones, ya que varias del norte y del este se sumaron a la protesta. Sin embargo, sigue habiendo ambivalencia entre algunos en el norte y el este hacia los manifestantes del sur. Esto se debe en gran parte a la falta de apoyo y solidaridad hacia las víctimas y las comunidades afectadas durante la guerra y la posguerra. Las movilizaciones comunitarias también han planteado cuestiones como la pobreza y la discriminación constantes a las que se enfrenta la comunidad tamil de Malaiyaha. Ha señalado los bajos salarios que recibe la comunidad, la falta de servicios y las discrepancias en cuanto a los derechos lingüísticos. Como indicó un activista que trabaja con la comunidad, “la reciente movilización y el activismo han permitido que se preste atención a la comunidad y que se hagan algunos esfuerzos para solucionar

las deficiencias, pero aún queda mucho por hacer para solucionar las desigualdades.⁴⁰ La persistencia de la movilización de las víctimas y las comunidades también ha mantenido abierto el espacio para conmemorar a los seres queridos perdidos durante la guerra y la posguerra, a pesar de las diversas tácticas del Estado para amenazar, intimidar y restringir los espacios conmemorativos.

6 Afrontar el racismo: comprender los éxitos y los retos

La discriminación y la violencia sufridas durante décadas condujeron a la movilización masiva de la que se habla en la sección anterior. El activismo de las víctimas, las comunidades y otras personas ha mantenido la atención sobre los múltiples desafíos de Sri Lanka y la necesidad de un cambio. Asimismo, esta movilización presionó a varios Gobiernos para que abrieran investigaciones sobre actos de violencia e incidentes concretos e instituyeran reformas estructurales y legislativas. Por ejemplo, la movilización de las víctimas y otras personas sobre las desapariciones forzadas llevó al nombramiento de varias comisiones de investigación.⁴¹ La presión a favor de la rendición de cuentas se tradujo también en el nombramiento de otras comisiones de investigación, como la Comisión de Investigación Udalagama.⁴² El impulso a las reformas y los pasos hacia la reconciliación dieron lugar a la Comisión de Lecciones Aprendidas y Reconciliación. Aunque no hay una respuesta definitiva sobre el impacto de estas iniciativas estatales en la búsqueda de justicia por parte de las víctimas, se debe reconocer que produjeron resultados que reconocían las violaciones ocurridas durante la guerra y la necesidad de que las autoridades tomen medidas.

Son las continuas demandas y el activismo de las víctimas y la sociedad civil lo que ha mantenido la presión internacional sobre el Gobierno. El incumplimiento de las promesas de verdad, justicia y reconciliación en Sri Lanka resultó en la adopción de varias resoluciones sobre Sri Lanka en el CDHNU. La Resolución 30/1 es clave, ya que fue el primer caso en el cual el Gobierno reconoció la necesidad de tomar medidas para reconocer y remediar las violaciones del pasado y garantizar la no repetición.⁴³ El resultado fue un ambicioso conjunto de propuestas que incluían medidas para abordar las desapariciones forzadas, la verdad y la justicia, las reparaciones, la liberación de tierras, las reformas del sector de la seguridad y otras medidas para fomentar la confianza. A pesar de la creación de dos mecanismos (la Oficina de Personas Desaparecidas y la Oficina de Reparaciones) todavía quedan dudas sobre su eficacia. Además, los otros dos mecanismos aún no se han establecido.

Estas promesas fueron posibles en un momento en que la gente deseaba un cambio. El cambio pacífico de régimen de 2015 suscitó una gran expectativa de que el “Gobierno Yahapalanaya” iniciaría reformas estructurales y legislativas. Hubo algunos signos alentadores, como la introducción de la decimonovena enmienda a la Constitución, algunas liberaciones de tierras en el norte de Sri Lanka, la entonación del himno nacional en tamil en el acto del Día de la Independencia y la criminalización de las desapariciones forzadas. Sin embargo, muchas de las promesas realizadas aún no se han hecho realidad. Esto se describe como “medias tintas” en materia de derechos humanos.⁴⁴ El fracaso en la plena aplicación de las reformas se atribuye a la falta de voluntad política y de liderazgo para sacar adelante cuestiones complejas, así como a los problemas de gobierno interno que llegaron a su punto crítico en 2018 con el golpe constitucional que paralizó la gestión de gobierno durante 52 días.

El golpe constitucional de 2018 y los atentados del Domingo de Pascua de 2019 revelaron la ruptura de la comunicación dentro del Gobierno de Yahapalanaya y las fisuras internas. También exacerbó la incertidumbre y la aprensión entre muchos que consideraban que había que priorizar la seguridad nacional y la economía. La

retórica impulsada por el bando de Rajapaksa y su maquinaria de relaciones públicas logró satisfacer las ansias de la población por un líder fuerte, alimentando el etnonacionalismo e ideologías particulares.⁴⁵ El campo para trabajar en la coexistencia y la reconciliación disminuyó, sustituido por una narrativa de extremistas de línea dura impulsada por el miedo y el etnonacionalismo.

Verdad y justicia: las iniciativas de reforma y reconciliación

Los recientes intentos por lograr la verdad y la justicia en Sri Lanka también han puesto de manifiesto los retos a los que se enfrentan las víctimas y otras personas. Además de las deficiencias estructurales y jurídicas, existe una falta de experiencia y capacidad para tratar cuestiones complejas como los crímenes atroces. La presencia del etnonacionalismo en diferentes ámbitos es un recordatorio constante de la importancia de un trabajo sostenido para abordar las causas profundas de los conflictos que requieren energía y atención a largo plazo. Hay que trabajar mucho para generar confianza dentro de las comunidades y entre ellas. Debido a la Aragalaya de 2022, existe una mayor conciencia política entre los ciudadanos que ahora se está utilizando para exigir la rendición de cuentas de los actores políticos. Este espacio debe emplearse para movilizar y seguir presionando.

Sri Lanka se enfrenta ahora a la posibilidad de crear una comisión de la verdad y la reconciliación (CVR). Aunque aún es pronto, las víctimas y la sociedad civil han cuestionado la necesidad de una CVR cuando Sri Lanka ha tenido varias comisiones en el pasado cuyas recomendaciones solo se aplicaron de forma limitada. Otros también critican que se priorice una CVR cuando Sri Lanka está plagada de impunidad en lo que respecta la atención y los recursos necesarios para abordar la rendición de cuentas.

En algunos casos, los tribunales han desempeñado un papel importante en la defensa del pluralismo y los derechos fundamentales, así como en la oposición a los intentos del Estado de restringir los derechos y socavar el Estado de derecho.⁴⁶ La decisión del Tribunal Supremo sobre la decimotercera enmienda a la Constitución fue un momento importante en la jurisprudencia que reconoció la necesidad de la descentralización del poder dentro de un país unificado y reconoció los reclamos de los partidos minoritarios por un modelo de poder compartido. Desde entonces, varias otras resoluciones y órdenes del Tribunal Supremo han reconocido el papel de las juntas provinciales y las competencias transferidas. Los tribunales también han juzgado casos de apropiación de tierras y, en algunos casos, han instado al Estado a que desista de las prácticas arbitrarias que privan a la población de sus tierras (o a que proporcione una compensación cuando lo haga).

Sin embargo, en aquellos casos donde se ha recurrido a la PTA y al ICCPR, los tribunales se han mostrado algo vacilantes a la hora de desafiar al Estado, lo que amplifica la percepción de que el Estado es todopoderoso a la hora de determinar qué se incluye dentro de la seguridad nacional y la armonía religiosa y racial. Dicho esto, recientemente el Tribunal Supremo se ha apartado de esta postura en casos en los que se han promulgado reglamentos en virtud de la PTA (en 2021) y reglamentos de emergencia (en 2019 y 2022). En lugar de ello, el Tribunal Supremo ha suspendido algunos reglamentos y ha admitido a trámite otros, reconociendo que existe algún asunto que revisar. A pesar de algunas buenas noticias con el poder judicial, también hay casos en los que los tribunales han emitido órdenes para bloquear los actos de conmemoración en el norte e impedir el derecho del pueblo tamil a recordar a los seres queridos que han perdido. En otros casos, el Tribunal Supremo no admitió a trámite varias denuncias sobre derechos fundamentales que cuestionaban la política de cremación forzosa. Esto suscitó inquietud en cuanto a la postura del tribunal respecto a los derechos de las minorías.⁴⁷

Asimismo, resulta preocupante la aplicación selectiva de las leyes por parte del brazo ejecutivo, que persigue a algunas comunidades y protege a otras. Por ejemplo, el uso del ICCPR en 2023 para perseguir a individuos como cómicos y blogueros debe contrastarse con otros casos recientes en los que los clérigos budistas que incitaban a la violencia contra las minorías nunca rindieron cuentas. Además, las autoridades no han tomado medidas contra

los clérigos budistas y otros acusados de apropiación de tierras en el norte y el este, pero han amenazado con actuar contra las minorías.

Sin embargo, se deben reconocer los cambios positivos para constatar la violencia, la discriminación y otras prácticas dirigidas contra las minorías étnicas y religiosas y oponerse a las políticas y prácticas racistas. A su vez, cabe destacar el papel desempeñado por los actores comunitarios y religiosos en la mitigación o prevención de la violencia. Tras los atentados del Domingo de Pascua de 2019, los grupos interreligiosos y los líderes comunitarios desempeñaron un papel clave para contener parte de la violencia y garantizar la existencia de sistemas de alerta temprana. Los agentes locales también han desempeñado un papel en el norte y el este para abordar las cuestiones interreligiosas y los conflictos por la tierra. Han mantenido un diálogo dentro de las comunidades y entre ellas. Más recientemente, los actores locales pudieron evitar que estallara la violencia en la ciudad de Trincomalee y en otras zonas del este, lugares que durante décadas han sido escenario de actos violentos. Se trata de ejemplos en los que las entidades locales pudieron desempeñar un papel eficaz en la prevención de conflictos, y quizá puedan contemplarse con cierto optimismo de cara al futuro.

7 Conclusión y recomendaciones

Este estudio de caso describe los continuos desafíos relacionados con el racismo que pueden contribuir al riesgo de atrocidades. Los ciclos de violencia y las políticas y prácticas discriminatorias en Sri Lanka lo convierten en un terreno fértil para posibles actos de violencia en el futuro. Se pueden tomar varias medidas a corto, medio y largo plazo en materia de reforma jurídica y política, medidas estructurales y concientización. Las siguientes recomendaciones se dirigen al gobierno de Sri Lanka, a los actores internacionales (incluyendo los donantes, la ONU y las agencias internacionales) y, por último, a los actores locales, incluyendo la sociedad civil, los grupos comunitarios, los académicos y los medios de comunicación.

Recomendaciones para el gobierno de Sri Lanka

- Demostrar liderazgo político en la lucha contra el racismo y las causas subyacentes del conflicto. Esto puede ser de diferentes maneras, desde declaraciones públicas y reformas políticas y legales, hasta demostrando tolerancia cero hacia el racismo, la incitación y la violencia.
- Tomar medidas para que los autores rindan cuentas iniciando procesos nacionales independientes de rendición de cuentas.
- Revisar y reformar los marcos institucionales, incluidas las reformas estructurales necesarias para abordar las causas subyacentes de los conflictos y la falta de rendición de cuentas.
- Revisar las leyes y políticas vigentes que fomentan el racismo y proponer reformas para evitar que se cometan crímenes atroces.
- Garantizar la plena aplicación de las leyes y políticas para hacer frente al racismo, la discriminación y la impunidad.
- Apoyar las iniciativas orientadas a la sensibilización y el compromiso ciudadano, así como las actividades educativas que apoyan y agravan el racismo, como las noticias falsas, la desinformación, la incitación al odio, la discriminación y diversas formas de violencia.
- Introducir y aplicar reformas estructurales y jurídicas para supervisar de forma independiente los medios de comunicación tradicionales, los medios sociales y la distribución de noticias falsas,

desinformación y discursos de odio. Incorporar poderes en las reformas para la moderación de contenidos y, en caso necesario, capacidad para suspender y/o cancelar licencias.

- Iniciar reparaciones individuales y colectivas, lo que incluye la conmemoración de los ciclos de violencia del pasado.

Recomendaciones para los actores internacionales, como los donantes, la ONU y las agencias internacionales

- Apoyar las iniciativas del Estado para hacer frente al racismo y disponer de medidas y mecanismos de prevención eficaces.
- Ofrecer los recursos y la formación necesarios a los actores locales, incluyendo a la sociedad civil, los comités ciudadanos, los comités de mezquitas y los actores de los medios de comunicación, para combatir el racismo y mantener sistemas eficaces de alerta temprana.
- Respaldar la documentación y otras iniciativas que recopilen tendencias y prácticas que puedan servir de base para las intervenciones políticas y las medidas prácticas de prevención.
- Hacer un seguimiento de las tendencias del racismo y de los crímenes atroces y explorar medidas internacionales que puedan responsabilizar a gobiernos e individuos, incluyendo procesamientos, prohibiciones de viaje y sanciones financieras.
- Al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a la Unión Europea y a otros, vigilar la situación de los derechos humanos e iniciar las acciones necesarias para prevenir crímenes atroces.
- Prestar apoyo financiero y técnico a los sistemas de alerta temprana y a las labores de sensibilización y educación.

Recomendaciones para la sociedad civil, grupos comunitarios, académicos y medios de comunicación

- Determinar los mecanismos existentes a nivel local/comunitario e identificar los puntos fuertes, las carencias y las limitaciones.
- Entablar un diálogo con la comunidad y los grupos religiosos y proporcionar recursos para un sistema eficaz de alerta temprana.
- Elaborar material educativo sobre las experiencias de violencia en Sri Lanka, las causas subyacentes del conflicto y otras cuestiones conexas, prestando especial atención a la participación de los jóvenes y del público en general.
- Desarrollar iniciativas de concientización y programas de educación ciudadana sobre el racismo, los crímenes atroces y otros temas relacionados.
- Impartir formación a los medios de comunicación, la sociedad civil, el mundo académico y otros sobre cómo identificar los factores desencadenantes/de riesgo y cómo mitigar y prevenir la incitación y la violencia.

Referencias

- Bhavani Fonseka & Luwie Ganeshathasan (eds), *Salient Aspects of Public Interest Litigation Jurisprudence in Sri Lanka*. CPA 2023
- Bhavani Fonseka & Uvin Dissanayake, *Sri Lanka's Vistas of Prosperity and Splendour: A Critique of Promises Made & Present Trends*, Centre for Policy Alternatives 2021
- Bhavani Fonseka, "Sri Lanka's Crisis and the Power of Citizen Mobilization," Carnegie Endowment for International Peace, June 2022 <https://carnegieendowment.org/2022/06/30/sri-lanka-s-crisis-and-power-of-citizen-mobilization-pub-87416>
- Bhavani Fonseka, *Elusive Justice & Emblematic Cases in Sri Lanka*. CPA, 2023.
- Bhavani Fonseka, *Transitional Justice in Sri Lanka: Moving Beyond Promises*. CPA 2017.
- Chulani Kodikara, "The Office on Missing Persons post-2020: Who and What is it for?," SSA, November 2021
- Chulani Kodikara. "Inscriptions and Erasures, Grief, Hope and Rights: A Struggle for Truth and Justice for Disappearances in Postwar Sri Lanka." PhD diss., University of Edinburgh, 2021.
- Danushka Medewatte, "Walking on a Tight Rope: Sri Lanka's Fragile Transitional Justice Process," *Harvard Human Rights Journal Online Symposium 'Transitional Justice in Context' (2017)* <http://harvardhrj.com/wp-content/uploads/sites/14/2017/10/Medawatte.pdf>
- Department of Census and Statistics (2012) *Census of Population and Housing*
- Dharsha Jegatheeswaran, "Heeding Victims' Voices: The Struggle of Tamil Families of the Disappeared in Sri Lanka" *Just Security*, March 3, 2021 <https://www.justsecurity.org/75095/heeding-victims-voices-the-struggle-of-tamil-families-of-the-disappeared-in-sri-lanka/>
- Harini Amarasuriya, "Protests and Counter Protests: Competing Civil Society Spaces in Post-war Sri Lanka," *Economic and Political Weekly*, Vol. 50, No. 9 (2015) pp. 49-55
- International Commission of Jurists, *Authority without Accountability: The Crisis of Impunity in Sri Lanka* (ICJ 2012)
- Jayadeva Uyangoda, *Questions of Sri Lanka's Minority Rights*. International Centre for Ethnic Studies, 2001.
- Jonathan Spencer, *Sri Lanka: History and the Roots of Conflict*. 1st ed., Routledge, 1990.
- Kate Cronin-Furman, "Human Rights Half Measures: Avoiding Accountability in Post War Sri Lanka," *World Politics* 72(1) (2020) 121-163.
- Kate Cronin-Furman, *Hypocrisy and Human Rights: Resisting Accountability for Mass Atrocities*. Cornell University Press, 2022.
- Kishali Pinto-Jayawardena, *Still Seeking Justice in Sri Lanka: Rule of Law, the Criminal Justice System and Commissions of Inquiry since 1977*. International Commissions of Jurists, 2010.
- Kristine Höglund & Camilla Orjuela, "Winning the peace: conflict prevention after a victor's peace in Sri Lanka," *Contemporary Social Science* 6:1 (2011) 19-37.
- Kristine Höglund & Camillia Orjuela, "Friction and the Pursuit of Justice in Post-War Sri Lanka," *Peacebuilding* 1 (3): (2013) 300-316.
- Kristine Höglund, "Testimony under threat: Women's voices and the pursuit of justice in post war Sri Lanka," *Human Rights Review* 20: (2019) 361-382.
- Kumari Jayawardena & Kishali Pinto-Jayawardena (eds.) *The Search for Justice: The Sri Lanka Papers*. 1st ed., Zubaan, 2016.

- Malathie De Alwis, "Disappearance and Displacement in Sri Lanka," *Journal of Refugee Studies* 22(3) (2009) 378-391
- Mark Drumbl, *Atrocity, Punishment, and International Law*. New York: Cambridge University Press, 2007.
- Meera Srinivasan. "In Sri Lanka, Tamil mothers of disappeared mark 2,000 days of struggle." *The Hindu*, August 12, 2022.
- Neloufer De Mel, "The Promise of the LLRC: Women's Testimony and Justice in Post-War Sri Lanka," International Centre for Ethnic Studies Research Paper No: 4 (2013).
- Nira Wickramasinghe, "After the War: A new patriotism in Sri Lanka?," *The Journal of Asian Studies* 68(4) (2009) 1045-1054
- Rajan Hoole & Kirupa Hoole, *Democracy Stillborn: Lanka's Rejection of Equal Rights at Independence?*. Sailfish 2022
- Rajan Hoole, *Palmyra Fallen: From Rajani to War's End*. University Teachers for Human Rights (Jaffna), 2015.
- Richard Gowing, "War by Other Means? An analysis of the contested terrain of transitional justice under the 'Victor's Peace' in Sri Lanka" *Working Paper* No. 13-138. London: London School of Economics, 2013.
- Sharika Thiranagama, "Claiming the State: Postwar Reconciliation in Sri Lanka," *Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism and Development* 4(1): (2013) 93-116.
- Sharika Thiranagama, "In Praise of Traitors: Intimacy, betrayal, and the Sri Lankan Tamil community." In *In Traitors: Suspicion, Intimacy, and the Ethics of State-Building*, edited by Sharika Thiranagama & Tobias Kelly. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2010.
- Sharika Thiranagama, *In My Mother's House: Civil War in Sri Lanka*. 1st edn, University of Pennsylvania Press, 2011.
- Shreen Saroor, *The Muslims in Post War Sri Lanka: Repression, Resistance & Reform*. Colombo: Alliance for Minorities, 2021.
- Stanley Tambiah, *Leveling Crowds: Ethnonationalist Conflicts and Collective Violence in South Asia*. 1st edn, University of California Press, 1996.
- Stanley Tambiah, *Sri Lanka—Ethnic Fratricide and the Dismantling of Democracy*. 1st edn, Chicago University Press, 1986.
- Vijay Nagraj & Farzana Haniffa, *Towards Recovering Histories of Anti-Muslim Violence in the Context of Sinhala-Muslim Tensions in Sri Lanka*. International Centre for Ethnic Studies, 2017.

Conclusiones de las iniciativas estatales

- | | |
|--|--|
| Final Report of the International Independent Group of Eminent Persons 2008 | Interim Report, Office on Missing Persons 2018 |
| Final Report—Consultations Task Force on Reconciliation Mechanisms 2016 | Lessons Learnt and Reconciliation Commission Report 2011 |
| Interim Report of the First Mandate of the Presidential Commission of Inquiry into Complaints of Abductions and Disappearances 2015a | Report of the Presidential Truth Commission on Ethnic Violence (1981-84) |
| Interim Report—The Office on Missing Persons Bill and Issues Concerning the Missing, the Disappeared and the Surrendered, Consultation Task Force 2016 | Report of the Special Rapporteur on Conflict Related Human Rights Violations—National Human Rights Commission 2006 |
| | Second Mandate, Presidential Commission of Inquiry into Complaints of Abductions and Disappearances 2015b |

Documentos internacionales

Joint Statement by the GoSL & the UN at the Conclusion of UN Secretary—General’s visit to Sri Lanka (2009)

Oral Update by the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Situation of Human Rights in Sri Lanka 2023

Report of the OHCHR Investigation on Sri Lanka (OISL) (2015)

Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences on the visit to Sri Lanka HRC/51/26/Add.1 (2022)

Report of the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence on the visit to Sri Lanka HRC/45/45/Add.1 (2020)

Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Situation of Human Rights in Sri Lanka 2014

Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Situation of Human Rights in Sri Lanka 2021

Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Situation of Human Rights in Sri Lanka 2022

UNHRC Resolution on Promoting Reconciliation, Accountability and Human Rights in Sri Lanka, HRC/Res/46/1 (2021)

UNHRC Resolution on Promoting Reconciliation, Accountability and Human Rights in Sri Lanka, HRC/Res/51/1 (2022)

United Nations, *Report of the Secretary General’s Panel of Experts on Accountability in Sri Lanka* (2011)

Notas

- 1 El siguiente estudio de caso ha sido redactado por un consultor independiente en nombre de la Iniciativa Global de Justicia, Verdad y Reconciliación (GIJTR, por su sigla en inglés). Se basa en una combinación de investigación documental, análisis de documentos y entrevistas. Por lo tanto, refleja estas perspectivas y conclusiones, recopiladas y redactadas por el autor o autores consultores. Los entrevistados han sido anonimizados a fin de garantizar su seguridad y privacidad. La GIJTR le agradece a cada uno de ellos por su tiempo y participación.
- 2 Censo, 2012.
- 3 Hoole 2015.
- 4 Ibid.
- 5 OISL, 2015.
- 6 OISL 2015; OACDH 2021; OACDH 2022.
- 7 Uyangoda, 2001.
- 8 Uyangoda 2001; Hoole 2015
- 9 Thiranagama, 2010.
- 10 Hoole, 2015; OISL, 2015; POE 2011; Spencer, 1990.
- 11 Entrevista con un activista de la sociedad civil, junio de 2023
- 12 Hoole, 2015; OISL, 2015; POE 2011.
- 13 Nagraj & Haniffa, 2017.
- 14 Nagraj & Haniffa, 2017; Saroor 2021.
- 15 Saroor, 2021.
- 16 Fonseka & Dissanayake, 2021.
- 17 Saroor, 2021.
- 18 Fonseka & Dissanayake, 2021.
- 19 Entrevista con un académico en Jaffna, mayo de 2023.
- 20 Fonseka & Dissanayake, 2021; Saroor, 2021.
- 21 Hoole, 2022; Relator Especial de la ONU, 2022; CTF, 2017.
- 22 Hoole 2015.
- 23 Entrevista con activista, junio de 2023.

- 24 CTF, 2017.
- 25 Fonseka & Dissanayake, 2021.
- 26 Ibid.
- 27 Ibid.
- 28 Hoole, 2015; OISL, 2015.
- 29 Entrevista con educador/activista en Batticaloa, mayo de 2023.
- 30 POE, 2011; OISL, 2015.
- 31 ACNUDH, 2021.
- 32 Fonseka & Dissanayake, 2021.
- 33 Hoole, 2015; Saroor, 2021.
- 34 Entrevista con un antiguo comisario de una iniciativa estatal, mayo de 2023.
- 35 Fonseka, 2022; Amarasuriya, 2015.
- 36 De Alwis 2009; Kodikara 2021.
- 37 Fonseka, 2022.
- 38 Ibid.
- 39 Fonseka, 2022.
- 40 Entrevista con un activista, junio de 2023.
- 41 Kodikara, 2021.
- 42 ICJ, 2012.
- 43 Medawatta, 2017; Fonseka, 2017.
- 44 Cronin-Furman, 2020.
- 45 Fonseka & Dissanayake, 2021.
- 46 Fonseka & Ganeshathasan, 2023.
- 47 Saroor, 2021.

